

La teoría del malestar social

Por [Martín Burgos*](#)

Docente e investigador del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina



<https://politicaspUBLICAS.flacso.org.ar/archivos/15328>

Resulta banal encontrarse con análisis de coyuntura económica en la que se pondera la estabilidad macroeconómica como un activo de este gobierno de cara a las elecciones. La sensación es que en todo caso se confunde estabilidad de precios con estabilidad macroeconómica. El gobierno insiste sobre las 3 anclas: fiscal, monetaria y cambiaria, pero ponderando sobre todo la fiscal, para explicar esos buenos resultados. El superávit fiscal se apoyó en 4 elementos claves: reducción de las jubilaciones, de los salarios de los empleados públicos, de las obras públicas y de las transferencias a las provincias. Estas reducciones de transferencias a las provincias impactan a su vez sobre la educación y la salud, en gran parte transferidas a las jurisdicciones subnacionales durante los años noventa, a favor de políticas de focalización neoliberal. Estos datos se traducen en conflictos sociales que vimos por el financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y distintos entes del sector público, así como el empeoramiento de la infraestructura cuyos costos en última instancia, termina pagando el sector privado. En ese sentido la defensa del INTA que realiza parte del mundo agropecuario demuestra a qué punto la división entre sector público y privado solo depende de como se mire: en muchos casos son parte de una misma red.

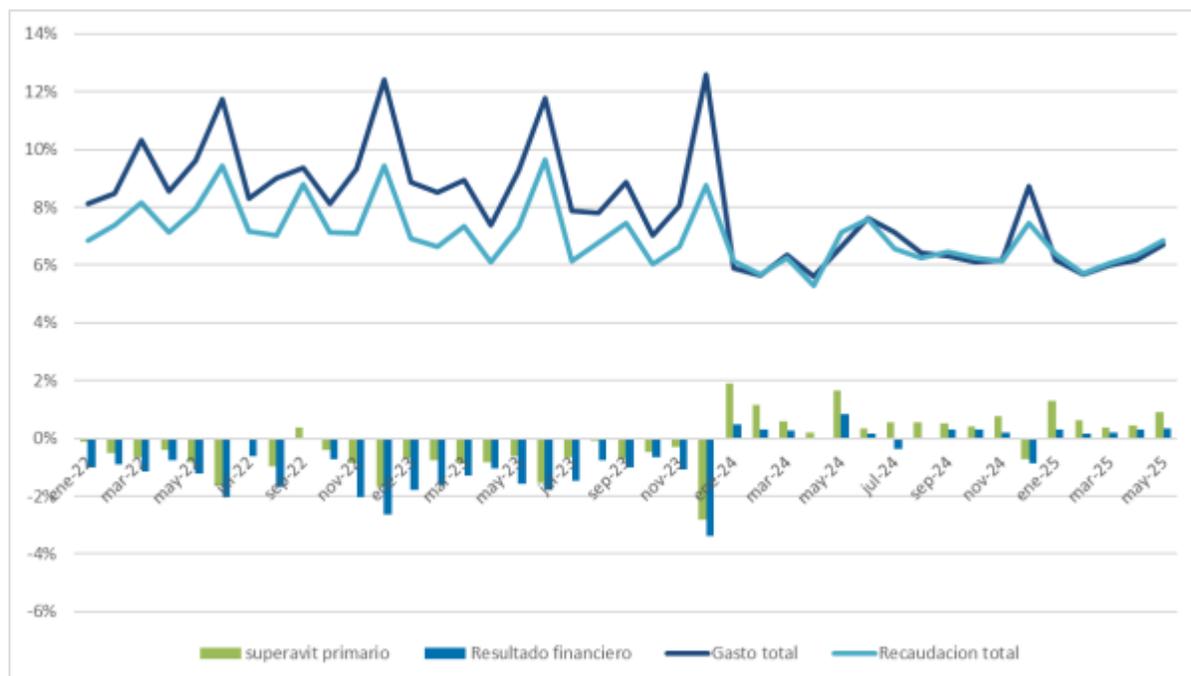
El gobierno puede controlar los gastos, lo que no puede es controlar sus ingresos, lo que hace los objetivos de equilibrio fiscal poco fiables. Son 3 los factores que inciden sobre la recaudación: las alícuotas que define el gobierno, la evolución de la actividad (que incide sobre IVA y ganancias) y la evolución de los precios

internacionales y del tipo de cambio (que incide sobre las retenciones). Lo que empezó a ocurrir en los últimos meses es una reducción de la recaudación por IVA y ganancias que marca interrogantes sobre el estancamiento de la economía. Esto pone en dudas también el objetivo del superávit fiscal, ya que se puede generar un círculo vicioso en el cual el ajuste de gastos impacte negativamente en la economía y a su vez genere menos ingresos fiscales.

Las perspectivas de recesión parecerían lógicas en un escenario donde dos de los motores de la demanda como el gasto público y los salarios son frenados por el propio gobierno. A su vez, el sector externo muestra signos de rápido deterioro con crecimiento de las importaciones, la compra de dólares de los ahorristas, y el turismo emisivo. La disyuntiva del gobierno es si se devalúa después de las elecciones, como lo piensa el consenso de los economistas, o si sigue firme en su idea de no devaluar. En ambos casos sería poco probable un crecimiento económico fuerte este año, e incluso se podría prolongar la recesión, lo que avivaría el conflicto social.

Los últimos datos parecen indicar que el superávit fiscal se está diluyendo por la fuerza aplastante de la caída de la recaudación. ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos del gobierno para sostener lo que considera un pilar de su política económica? Si suponemos que no habrá incremento de la actividad que permita mejorar esa situación, entonces las alternativas son pocas: aumentar alícuotas de algunos impuestos o una mayor baja del gasto. La vuelta de las retenciones a las exportaciones a 35% puede verse como un caso de mejora de la alícuota, pero se da en un momento donde se vendió gran parte de la cosecha. Es como poner un impuesto extraordinario al uso de teléfonos fijos: tendrá escaso poder recaudatorio, por lo menos de aquí a fin de año. Si volvemos nuestra vista hacia atrás, el gobierno tuvo más bien un impulso hacia la eliminación de algunos impuestos progresivos como el impuesto PAIS, la reducción de alícuotas en bienes personales y de las retenciones a las exportaciones, o el reestablecimiento del impuesto a las ganancias. No estamos frente a una reforma tributaria de amplitud. El gobierno pareciera orientarse más bien a una simplificación tributaria (concentración en pocos impuestos eliminando el resto) o a un cambio en algunos esquemas (como un mayor IVA para reemplazar los ingresos brutos provinciales).

Ingresos y gastos totales



Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.

Si bien los voceros libertarios dan rienda suelta al argumento sobre el nivel de impuestos como causa de las dificultades que tienen las empresas para competir, no parece tener asidero, ya que algunos sectores que no

pagan IVA ni ingresos brutos viven su peor momento económico. Esa discusión es la repetición de los debates de fin de los años noventa: en esos tiempos de deflación, se demostraba por el absurdo que a cierto nivel de tipo de cambio la industria local no podía competir aún sin pagar impuestos. Pero más allá del argumento, la memoria fresca del gobierno de Macri, que bajó los impuestos antes de bajar el gasto, es una advertencia para los ortodoxos que vivieron esa experiencia de cerca, como el Ministro de economía Luis Caputo.

Por lo tanto tenemos que mirar por el lado de la reducción del gasto, otra vez. Como en sus primeros meses, es de esperar que se viva una segunda etapa de ajuste con consecuencias devastadoras, no solo sobre la macroeconomía (al generar mayor recesión) sino sobre las perspectivas de desarrollo económico futuro. Si miramos para atrás, la casi eliminación de la obra pública no parece ser un problema de relevancia para este gobierno. El presente de eliminación de varias dependencias del Estado como el INTI o ANMAT es toda una señal.

Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica

¿Cual es la idea de fondo de Milei y el libertarianismo? Que cada uno se haga cargo de sus consumos, incluidos la salud y la educación, en un esquema de desregulación de los mercados que le da a los más poderosos (como las empresas prepagas de salud) la posibilidad de definir lo que se cubre y lo que no. El propio Elon Musk terminó diciendo que este modelo de “motosierra” de Milei es de los más crueles e insensibles. El destrato hacia las personas con discapacidades es el mayor nivel de crueldad ejercido por parte de funcionarios de este gobierno, que padecen la peor de las discapacidades: la de no tener corazón.

La diatriba de Milei contra Wilfredo Pareto y toda la teoría del bienestar fundada es objeto de su último libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”. No podemos citar ese texto sin advertir sobre la desprolijidad de la edición que, sin hablar de los errores de tipeo, reúne discursos, papers y capítulos de manuales sin ton ni son, alguno en inglés (que es la mera traducción de una parte ya escrita en castellano), así como las numerosas repeticiones de conceptos que hace azarosa la lectura del libro. Eso no constituye una novedad, y fue advertido en otros libros del autor. No obstante, la desprolijidad es tal vez la marca del genio (o tal vez no).

En el libro, Milei desconoce las bondades de la intervención del Estado en los casos de regulación ambiental, obras públicas, regulaciones laborales, lo que explica su ataque contra las instituciones intermedias, el marxismo cultural y la inversión pública. Esa idea parece llevarnos a la conclusión que las rutas la deben pavimentar los propios vecinos, a través de la constitución de consorcios al mismo estilo del que acostumbramos en edificios de copropiedad. Los problemas de implementación de esa idea a gran escala podría revelarse catastrófica, como lo adivinará cualquiera que tuvo que enfrentar en una asamblea de consorcio las dificultades para que se realicen grandes inversiones. Por eso en varios edificios siguen existiendo cables de tela: no quedan claro los incentivos ya que nadie quiere ser propietario de los pasillos y lugares comunes. Esa “teoría del malestar social” ya está mostrando sus limitaciones: los baches de las calles van creciendo, los suministros de gas en Mar del Plata se vieron limitados en lo más crudo del invierno, y cualquier catástrofe natural es tratada con desdén: el caso de Bahía Blanca está ahí para demostrarlo.

Los países con superávit fiscal

Cuando miramos el mapa que ofrece el FMI sobre cuáles son los países que tuvieron superávit fiscal en 2024, salta a la vista que ningún país desarrollado grande se encuentra en ese grupo. Se puede mencionar a países medianos como México (rankeado número 13 por PBI en paridad de poder adquisitivo), Egipto (número 18), Pakistán (22) y Argentina (28), pero no son precisamente países desarrollados. Casualmente o no, Pakistán, Egipto y Argentina están con un stand-by en el hospital económico del mundo (el FMI), lo que marca lo precario de su situación. Veremos si la sangría fiscal a la que los someten sea la receta adecuada para curar sus males de populismo... tememos que no.

Entre los países chicos con superávit fiscal nos encontramos con países con enormes recursos naturales como Noruega y Qatar, que tienen una situación estructural superavitaria derivada de su escasa población e ingente recursos hidrocarbúricos. Estos no pueden ser un ejemplo relevante para ninguna clase de políticas públicas,

aunque es importante entender que la política fiscal es más eficaz si se recauda en los sectores que más acumulan capital.

Otro grupo de países lo constituyen los paraísos (o guaridas) fiscales. Estos son Suiza, Bahamas, Irlanda, y varias islas del Caribe. Estaríamos tentados en pensar que el superávit fiscal de esos países es el fruto de la competencia que estos libran a nivel internacional para quedarse con los impuestos que las empresas y los ricos deberían pagar en otros países. Esa competencia totalmente nociva, que Gabriel Zucman menciona como una externalidad negativa a nivel internacional, tiene como contraparte el déficit del resto del mundo, o por lo menos que el resto del mundo no consiga la recaudación que debería conseguir en teoría. Por último los países más pobres del mundo, entre los cuales los africanos y los centroamericanos, suelen tener superávit fiscal por razones diversas, pero que claramente se alejan del caso argentino, o eso queremos creer.

Existen casos como los de Rusia o Italia que tuvieron superávit fiscal puntuales. Ese es el caso de numerosos países europeos, que pasan de un período de superávit a otro de déficit fiscal sin que eso incida de forma relevante. Esto es así porque, como ya lo dijimos, desde el Presupuesto de cada Nación se votan los gastos (que deben erogarse) pero solo se puede estimar los ingresos, que suelen variar. De esa forma siempre hay un margen de incógnita respecto del cierre de los años fiscales. No está de más mencionar que los países de mayor envergadura como Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, suelen tener abultados déficits fiscales. Asimismo, en la región sudamericana, el superávit fiscal es una rareza que se avista en algunos años y en algunos países: en general el déficit prevalece.

La relación Nación Provincia

No podemos dejar de mencionar que todo lo anterior no es solo cuentitas de almacenero, como lo demuestran las fuertes tensiones existiendo entre Milei y los gobernadores. Estos últimos entienden que, más allá del discurso utópico libertario, en concreto alguien se tiene que hacer cargo de los problemas y lo que pretende el gobierno es mostrar superávit fiscal transfiriendo a las Provincias la gestión de partes importantes del rol del Estado: salud, educación, pero también obras públicas y política productiva. Es sabido que el primer inconveniente en esos casos son las diferentes estructuras económicas de las provincias que imposibilitan que puedan ampliar recursos tributarios propios.

En última instancia, la perspectiva libertaria, demasiado simplista, descarta el rol del Estado en su dimensión política y de poder, pero sobre todo en su dimensión soberana: la soberanía nacional cuesta cara y por eso existe el gasto público. En un país federal, la tendencia del gobierno a transferir los gastos a las provincias pero no los ingresos podría tener fuertes impactos políticos, en el Congreso pero también en términos mucho más amplios. Estos ajustes sin sentido no sólo ponen en riesgo herramientas del desarrollo económico sino que suponen un desafío a la propia integridad nacional.